



*Poder Judicial de la Nación*  
*Cámara Federal de Apelaciones de General Roca*

General Roca, de abril de 2023.

**VISTO:**

Este expediente caratulado **"FAGLA SRL; FAGLA SRL; RUBIO, Gladis Érika; RUBIO, Alberto sobre Apropiación Indevida de Recursos de la Seg. Social"**, (Expte. N°FGR 2872/2019/CA1), venido del Juzgado Federal de General Roca; y,

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

**El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:**

1. Contra el auto de primera instancia que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción formulado por la defensa oficial que asiste a los arriba nombrados, dedujo esa parte recurso de apelación.

2. Para una cabal comprensión de la cuestión debatida se hace preciso reseñar ciertas circunstancias salientes del trámite de estas actuaciones.

Veamos. El incidente tuvo su inicio con la presentación de la Defensoría Oficial que asiste a la imputada Gladys Erika Rubio y, por entonces, también al imputado Alberto Rubio -ambos responsables de la firma "*Fagla SRL*"- mediante la cual solicitó que se dictase el sobreseimiento de los nombrados por prescripción de la acción penal. En tal sentido, indicó que habían sido convocados a prestar declaración indagatoria el 23 de abril de 2020 por "[h]aber omitido depositar, dentro de los

*treinta días hábiles administrativos de vencidos los plazos de ingreso, los importes retenidos a sus empleados en concepto de aportes al Régimen Nacional de La Seguridad Social y al Régimen Nacional de Obras Sociales, en orden al período fiscal de marzo del año 2012, arrojando este un monto total de \$160.280,23...", hecho que habría acaecido el 16 de mayo de 2012 y que resultaba atrapado por el art.279 de la ley 27.430 que modificó el art.7 de la ley 24.769, cuya pena máxima de prisión era de 6 años, por lo que entre esa fecha y la del llamado a prestar declaración indagatoria, había transcurrido ese plazo sin que se hubiesen verificado causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal.*

*Sobre el asunto, se expidió el MPF ante el Juzgado Federal local cuyo representante dictaminó que correspondía hacer lugar a lo solicitado por la defensa.*

De su lado, la querella postuló el rechazo de la solicitud en razón de que la denuncia había sido radicada el 3/04/2018 ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1 –que había intervenido primigeniamente en autos FSM N° 37846/2018, caratulados “*Fagla S.R.L. y otros s/apropiación indebida de Los recursos de La seguridad social*”- cuyo magistrado a cargo había ordenado en fecha 16/04/2018 la recepción de indagatoria a los involucrados, por lo que apreciaban que dicho acto había interrumpido el curso de la prescripción de la acción penal.

3. Para resolver como lo hizo, el *a quo* consideró que, de acuerdo a lo sostenido por la AFIP, la defensa no había tenido en cuenta en su pretensión el actuar del juez subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional





*Poder Judicial de la Nación*  
*Cámara Federal de Apelaciones de General Roca*

de San Isidro N°1, quien en fecha 16/04/2018 ordenó la convocatoria a indagatoria (art.294 CCP) de los imputados ante la sospecha de la posible comisión de las maniobras aquí investigadas.

En esa línea, señaló que *"teniendo en cuenta dicho acto, tengo que el plazo transcurrido desde que se configuró el delito atribuido a los imputados 4/2012 y la fecha en la que fueron llamados a prestar declaración indagatoria, 4/2018, no transcurrió el plazo máximo de prisión estipulado en el art.7 de la ley 23.427, mismo que se utiliza como parámetro para tener por configurada la prescripción de la acción penal"*.

4. Al recurrir, la defensa oficial expresó, luego de mencionar los antecedentes del caso, que aquel acto de citación realizado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N°1 carecía de virtualidad para detener el curso de la prescripción, en tanto *"recién fue comunicado a mis defendidos con fecha 4 de julio de 2020"*.

En ese sentido, recordó lo resuelto por esta alzada en *"Fenoglio"* (sent.int.32/00) y aclaró que la doctrina allí fijada había sido refrendada posteriormente por el Juez Barreiro en el caso *"Atkinson"* (sent.int.116/06).

5. Ya en la instancia, se presentó el MPF, ocasión en la que la Fiscal General, tras reseñar los antecedentes del caso, estimó que la apelación debía ser rechazada, habida cuenta de que la acción penal se hallaba subsistente por haber sido interrumpida. En esa dirección destacó que, tal como lo había expresado el *a quo*, entre el momento en que se tuvo por configurado el hecho reprochado -abril de 2012- y la



convocatoria dispuesta a los encausados en los términos del art.294 del CPPN, no habían transcurrido los 6 años fijados como pena máxima del delito reprochado, *“de allí a que el curso de la prescripción se haya detenido y no podría extinguirse la acción por esta causal pedida, circunstancia que se materializó en el mes de abril del año 2018 por decreto dictado por el doctor Juan Manuel Culotta, punto VIII, obrante a fs. 24/28 del legajo digital”*, más allá de lo señalado por la defensa en cuanto a que el acto carecía de virtualidad para detener el curso de la prescripción.

En relación con esto último afirmó que la letra del inc. b) del art.67 del CP no ofrecía dudas en cuanto a que el primer llamado a prestar declaración indagatoria poseía entidad interruptora del curso de la prescripción, a lo que se sumaba que el legislador no había condicionado ello a ninguna circunstancia, enumerando de manera taxativa las causales (ley 25.990), por lo que era irrelevante la notificación al imputado.

A su término, transcribió lo resuelto por la mayoría de este Tribunal *in re “Atkinson”*, en punto a que tras la reforma de la mentada ley al art.67 del CP, no resultaba aplicable la doctrina del precedente *“Fenoglio”*.

De su lado, hizo lo propio el MPD remitiéndose a los agravios ya expresados y remarcó que la presentación del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada contenía una parcial lectura y argumentación en torno al contenido de los fallos invocados, asunto sobre el que se había expedido al traer a colación el voto del juez Barreiro. Seguidamente, aclaró que no desconocía que se trataba de un voto en minoría,





*Poder Judicial de la Nación*  
*Cámara Federal de Apelaciones de General Roca*

no obstante las razones jurídicas se encontraban indemnes de la crítica. A su término, insistió en que –a su entender– debía aplicarse directamente lo señalado por el referido voto en “*Fenoglio*” en función de lo señalado por la Corte Suprema en el caso “*Baretta*”, Fallos 183:408 (1939).

6. Reseñadas las notas salientes de este legajo a partir de las piezas mencionadas, adelanto, el recurso debería ser rechazado.

Ello así lo considero porque, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal ante esta alzada –argumentos que comparto y a los que me remito–, si el hecho reprochado a los encartados Gladys Erika Rubio y Alberto Rubio –enmarcado en las previsiones del art.279 de la Ley 27.430 que modificó el art.7 de la Ley 24.769 y cuya penalidad máxima de prisión es de **6 años**– se tuvo por configurado el **16/05/2012** y la primera convocatoria de los nombrados en los términos del art.294 del CPP se materializó el día **16/04/2018** (cfr. punto VIII del decreto de fs.24/28 del legajo digital), fácil resulta concluir que la acción penal en autos no se ha extinguido por prescripción.

Una cuestión más resulta necesario precisar y se vincula al precedente “*Fenoglio*” invocado por la defensa en tanto no sólo fue abandonado por composiciones posteriores de esta alzada, sino que además la actual nunca acudió a él. Y no debe verse en ello un cambio arbitrario de criterio sino que otrora obedeció a una modificación legislativa y ahora a que siempre ha sido la pauta que ha guiado el análisis y decisión de este tipo de supuestos por este cuerpo.



Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo, como se adelantó, rechazar el recurso deducido por la defensa, con costas (art.531 del CPP).

**El doctor Richar Fernando Gallego dijo:**

Coincido con las conclusiones del voto que antecede y por lo tanto me expido del mismo modo.

Por ello, **EL TRIBUNAL RESUELVE:**

I. Rechazar el recurso deducido por la defensa oficial en representación de Gladys Erika Rubio y Alberto Rubio, con costas;

II. Registrar, notificar, publicar y devolver.

